



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN

Enrique Playán Jubillar

DIRECTOR DE LA AGENCIA  
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN



## DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nº EXPEDIENTE: 001-055501

FECHA: 31/MARZO/2021

NOMBRE: [REDACTED]

DNI: [REDACTED]

CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

Le agradecemos que se ponga en contacto el Ministerio de Ciencia e Innovación para ejercer su derecho de acceso a la información pública, consistente en:

### SOLICITUD

#### Asunto:

Proyecto CGL2016-76532-R Programa Estatal de I+D+i

#### Información que solicita:

"Como parte de las AYUDAS CONCEDIDAS en la CONVOCATORIA 2016 - PROYECTOS I+D+I PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD se concedió una ayuda de 90.750 euros al proyecto ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE MODELOS GEOLOGICOGENETICOS EN EXPLORACION DE YACIMIENTOS DE METALES HI-TECH Y CRITICOS (W-TA-NB-SN-BELI- AU) EN EL NO DE LA PENINSULA IBERICA, con referencia CGL2016-76532-R, y beneficiario Dpto. de Geología de la Universidad de Oviedo. Proyecto desarrollado entre 2016 y 2019. Se solicita copia del expediente relativo a dicho proyecto, redactando cualquier documento que incurra en posibles causas de exclusión de acceso".

### TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD

- 1º. A partir del 31 de marzo empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. La solicitud fue prorrogada con el fin de poder recabar la información disponible.
- 2º. El plazo fue ampliado por un mes más, dado el volumen de información solicitada por el interesado.
- 3º. Al contener la información solicitada derechos de propiedad intelectual y datos de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 19.3 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con fecha 20 de mayo de 2021 se dio traslado de la solicitud al Investigador Principal del Proyecto y al representante legal de la

Universidad de Oviedo al objeto de que pudieran manifestar lo que considerasen oportuno. Con fecha 28 de mayo de 2021, se recibieron dichas alegaciones en esta Agencia Estatal, se reproduciéndose a continuación un extracto de las mismas:

*"(...)Tercero. Que el acceso a la documentación contenida en el expediente de dicho Proyecto de Investigación afecta directamente a los derechos e intereses de la que suscribe, del resto de miembros del Proyecto de Investigación y también de otros investigadores que son mencionados en el expediente, en el que se contienen datos de carácter personal y relativos a la propiedad intelectual.*

*Cuarto. Que dicha documentación afecta a siete investigadores del proyecto: el investigador principal, cuatro miembros del equipo de investigación y dos del equipo de trabajo, que son extranjeros; a cuatro investigadores colaboradores; y a cinco doctores formados por el equipo de investigación.*

*Quinto. Que diversos documentos del citado expediente contienen datos personales de dichas personas. Así, a título de ejemplo la Solicitud, las Justificaciones Técnicas Intermedia y Final, los Curriculum Vitae, el Memorial Científico-Técnico y la Solicitud de prórroga. Entre esos datos se incluyen nombres completos, DNIs o números de pasaporte, fechas de nacimiento, filiación profesional, correos electrónicos, domicilios, teléfonos personales, entre otros.*

*Sexto. Que la documentación del expediente también contiene datos que afectan a los derechos de propiedad intelectual de las personas miembros del Proyecto de Investigación. Es el caso de la Memoria Científico-Técnica y las Justificaciones Técnicas Intermedia y Final. En la Memoria se desarrolla en profundidad una idea original de investigación, con una hipótesis de partida, unos objetivos y una metodología de trabajo para llevarlos a cabo, que han sido creados por la Investigador Principal y los miembros del equipo de investigación. Por otro lado, en la Justificación Técnica Final se exponen los resultados de esta investigación, algunos de los cuales han sido, están siendo y serán en el futuro plasmados en publicaciones científicas. Se trata de acceder a documentos que deben considerarse por sí mismos obra científica con derechos de propiedad intelectual para sus autores. Por otro lado, parte de los resultados derivados de esta investigación son ya de libre acceso en artículos científicos ya publicados (algunos Open Access). Además, en el documento de Justificación Técnica Final se ha presentado un resumen del proyecto para su posible difusión pública, a través de páginas webs institucionales, tal y como exige el Ministerio de Ciencia e Innovación.*

*Séptimo. Que en el expediente figuran también datos y documentos, en forma de cartas de apoyo, referidos a (...) empresas (...), que afectan a sus derechos de propiedad industrial, como son las localizaciones geográficas puntuales de sus trabajos de exploración. Dichas empresas aceptaron colaborar en el proyecto facilitando información y se comprometieron a través de un documento firmado a permitir su difusión científica en congresos y revistas científicas. Sin embargo, no han consentido, en ningún caso, que su participación, sus datos ni documentos se hiciesen públicos. Por tanto, el acceso al expediente supondría un perjuicio para los derechos e intereses de dichas empresas, pudiéndose hacer un uso malintencionado de su participación".*

## RESOLUCIÓN | CONCESIÓN PARCIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Una vez analizada su solicitud, el órgano competente del Ministerio de Ciencia e Innovación resuelve **CONCEDER PARCIALMENTE** el acceso a la información solicitada, que se adjunta a la presente resolución.



## MOTIVACIÓN

1º. De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 19/2013, las resoluciones que concedan el acceso parcial habrán de ser motivadas.

2º. Para la resolución de la solicitud debe tenerse en cuenta el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, de este Consejo de Transparencia, relativo a la aplicación de los límites contemplados en la LTAIBG:

“Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, podrán ser aplicados”.

De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos.

La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo.

En este sentido, su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario, deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información.

Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).”

El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. El artículo 14 del mismo texto legal determina que corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente (...).

Por otro lado, cabe señalar que no existe la obligación de registrar o marcar la obra para que sea protegida por los derechos de autor, sino que los derechos de autor nacen con la creación de la misma. El apartado 1, del artículo 10, de la Ley de Propiedad Intelectual establece que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

Ciertamente, el proyecto al que se pretende acceder contiene información que pondría en manos de terceros la innovación tecnológica llevada a cabo por el personal investigador de la Universidad de Oviedo. Facilitar determinada información supondría poner en peligro los derechos de intelectual (derechos de autor) de la entidad investigadora, igual que podría poner en evidencia secretos comerciales dignos de protección, limitados también al público en virtud del artículo 14.1 j) de la LTAIBG.

3º. Con respecto a los datos de carácter personal del personal investigador que obra en el expediente solicitado y que no están especialmente protegidos, el artículo 15 de la LTBG establece lo siguiente:

“(…)2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la



divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

- a) El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
- c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
- d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”.

Al respecto, el CI/002/2015, de 24 de junio, dictado conjuntamente entre el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, ha interpretado que para la ponderación hay que tener en cuenta lo siguiente:

Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contenidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG. V. Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores, valorar si resultan de aplicación los límites previstos en el artículo 14.

Por otro lado, el CI/001/2015, de 24 de junio, dictado conjuntamente entre el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, en relación a las retribuciones del personal público ha interpretado lo siguiente:

- a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Y ello porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal.
- b) En este sentido -y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto-, con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente



ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a:

Personal eventual de asesoramiento y especial confianza -asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial.

Personal directivo, esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y e) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. Personal no directivo de libre designación.

Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 -éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalentes, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados.

Según lo establecido en el artículo 17 de la LTBG el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, no obstante, como señala el artículo 15, la justificación de la petición de información será un elemento de ponderación para acceder a la misma. En el presente caso, el interesado se ha limitado a enunciar la información solicitada sin sustentarla en justificación alguna.

Debe tenerse en cuenta que junto con los datos identificativos de los investigadores, en determinados documentos del expediente (CVs, memoria económica, memoria científico-técnica, informes de seguimiento científico, informes de seguimiento económico, etc.) aparecen datos de su vida laboral, vida particular, formación y retribuciones, que pueden afectar a su intimidad y seguridad, teniendo en cuenta además que este personal no desempeña funciones de especial confianza ni participa en la toma de decisiones de la Universidad de Oviedo.

4º. Visto lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud y las alegaciones formuladas por los terceros afectados, esta Agencia Estatal considera que procede el acceso al parcial expediente solicitado:

En virtud de lo establecido en el artículo 14.1.j) de la LTBG, no se facilitará acceso a la documentación que afecta directamente a la propiedad intelectual e industrial de los terceros afectados.

En virtud de lo establecido en el artículo 15 de la LTBG, una vez realizada la ponderación anteriormente argumentada, no se facilitará el acceso al contenido de los datos de carácter personal de los investigadores participantes en el proyecto de investigación.

El resto de la información se adjunta a esta resolución.

De acuerdo con el art.15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, le recordamos que la normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo) es aplicable al tratamiento de los datos personales que contiene la presente resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o bien recurso contencioso administrativo:

- De forma previa y potestativa, podrá interponer, en el plazo de un mes, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conforme con lo recogido por el art.24 de la Ley 19/2013.
- En el plazo de dos meses, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia Madrid de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 y en la Ley 39/2015.

En ambos casos, el plazo para interponer recurso o reclamación se computará a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Enrique Playán Jubilar